

DeforestaciÃ³n en Colombia: gobierno insiste en operaciones militares sin llegar a los principales responsables

DescripciÃ³n

default watermark

- La â??CampaÃ±a Artemisaâ?? contra la deforestaciÃ³n sigue sin dar golpes contundentes contra los grandes financiadores y determinadores de la tala. La confianza de las comunidades rurales en el Estado se debilita cada dÃa.

- El Gobierno sigue sin resolver el tema estructural de la tierra, que segÃºn los expertos es el corazÃ³n del problema de la deforestaciÃ³n. Al famoso catastro multipropÃ³sito, que pretende la titulaciÃ³n y formalizaciÃ³n de predios que han estado en un eterno limbo jurÃdico, le falta un trecho largo para concretarse.

En enero de 2021 el presidente IvÃ¡n Duque presentÃ³ la PolÃtica Nacional para el Control de la DeforestaciÃ³n y la GestiÃ³n Sostenible de los Bosques y, con ella, puso en el papel una ruta a 10 aÃ±os para solucionar uno de los problemas ambientales mÃ¡s graves de Colombia. El reto es que, para sacarla adelante, el Gobierno tendrÃ¡ que sentarse a negociar con organizaciones campesinas, sociales y Ã©tnicas con las que no ha tenido una buena relaciÃ³n.

AdemÃ¡s, la â??CampaÃ±a Artemisaâ??, estrategia militar contra la tala, sigue sin dar con los responsables y grandes financiadores de la deforestaciÃ³n, lo que ha generado gran desconfianza en las comunidades rurales que mÃ¡s podrÃan ayudar para frenar la pÃ©rdida de bosque.

En medio de ese complicado escenario, estÃ¡ el agravante de que el Gobierno sigue sin resolver el tema estructural de la tierra porque al catastro multipropÃ³sito, que pretende la titulaciÃ³n y formalizaciÃ³n de predios que han estado en un histÃ³rico limbo jurÃdico, le falta un trecho largo para estar completo y esto es indispensable para luchar contra la deforestaciÃ³n.



Foto: CÃ©sar CarriÃ³n â?? Presidencia

El discurso y la estrategia

El presidente IvÃ¡n Duque presentÃ³ su polÃtica pÃºblica contra la deforestaciÃ³n en Leticia (Amazonas) en diciembre de 2020 y resaltÃ³ que era el primer Conpes â??un documento que en Colombia funciona como una hoja de ruta en materia econÃ³mica y socialâ?? que â??hace referencia explÃcita al control de la deforestaciÃ³nâ?•. Este, sin embargo, como lo seÃ±ala en una columna de opiniÃ³n el profesor en PolÃtica Forestal JosÃ© Miguel Orozco, no tiene nada de novedoso, pues desde 1996 existe un documento Conpes sobre PolÃtica de Bosques que tiene como uno de sus principales objetivos reducir la deforestaciÃ³n.

Lo que sÃ es nuevo es que el Presidente tuvo un cambio en su discurso. Cuando Duque anunciÃ³ la â??CampaÃ±a Artemisaâ??, en abril de 2019, indicÃ³ que detrÃ¡s de la pÃ©rdida de bosque estaban principalmente los cultivos de coca y, por ende, el narcotrÃ¡fico y las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto fue algo que reiterÃ³ una y otra vez el entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Pero esta vez, en Leticia, el presidente hablÃ³ de fortalecer â??la extinciÃ³n de dominio de todos los bienes y semovientes [ganado] que tienen el

propÃ³sito de generar acaparamiento contra nuestras riquezas naturalesâ?•.

Esta declaraciÃ³n evidencia la intenciÃ³n del Gobierno de ampliar su mirada a otros motores de deforestaciÃ³n mÃ¡s allÃ¡ de la coca, incluyendo el acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y ganaderos. Sin embargo, hasta ahora el Ãºnico resultado contra supuestos â??grandes deforestadoresâ?• ocurriÃ³ en febrero de este aÃ±o, cuando el EjÃ©rcito anunciÃ³ la captura de cuatro hombres en MapiripÃ¡n, Meta, a quienes seÃ±alÃ³ como miembros de la disidencia del frente primero de las FARC y como responsables de la deforestaciÃ³n en ese municipio.

Los demÃ¡s operativos que han traÃdo algunos resultados no han sido a travÃ©s de la CampaÃ±a Artemisa. Por ejemplo, el Fiscal general Francisco Barbosa destacÃ³, hace un mes, la ejecuciÃ³n de seis operaciones en las que capturaron a 40 personas. Entre los operativos hubo uno en San JosÃ© del Guaviare, en el que capturaron a seis personas sospechosas de deforestar 800 hectÃ¡reas para ganaderÃa a gran escala dentro del resguardo indÃgena Nukak MakÃº y otro en San Vicente del CaguÃ¡n, CaquetÃ¡, donde detuvieron a Gildardo Toledo Villa, a quien seÃ±alan como â??uno de los mayores auspiciadores de la ganaderÃa extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachosâ?•. En ninguna parte la FiscalÃa mencionÃ³ a la CampaÃ±a Artemisa.

default watermark

default watermark


default

Foto: @Infopresidencia

Lo mismo ha pasado con otros operativos, como el de enero de este aÃ±o, en el que la FiscalÃa anunciÃ³ la captura de un ganadero en San Vicente del CaguÃ¡n. Nuevamente, el nombre â??Artemisaâ?? no fue mencionado.

El ganadero se llama Vidal Rojas Herrera y es seÃ±alado como uno de los â??mayores auspiciadores de la deforestaciÃ³n en el Parque Nacional Natural Tiniguaâ?•. En concreto, la FiscalÃa indica que â??vendiÃ³ 21 000 cabezas de ganado en dos dÃ©cadasâ?• y que tiene 500 vacas solo en ese parque. TambiÃ©n asegura que auspiciÃ³ â??la tala de 1139 hectÃ¡reas para la crÃa y cuidado de ganadoâ?• y por eso le imputaron los delitos de aprovechamiento ilÃcito de recursos naturales, invasiÃ³n de Ã¡rea de especial importancia ecolÃ³gica e incendio. No obstante, se ordenÃ³ arresto domiciliario en lugar de prisiÃ³n efectiva.

Mientras la FiscalÃa avanza en esos casos, es probable que estas personas no reciban una sanciÃ³n dura porque el CÃ³digo Penal no tipifica la apropiaciÃ³n ilegal de tierras como delito, cuando es el â??problema madre de la deforestaciÃ³nâ?•, dice Rodrigo Botero, director de la FundaciÃ³n para la ConservaciÃ³n y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Botero indica que tampoco se tipifica la conexiÃ³n del acaparamiento con el uso de dineros pÃºblicos, el lavado de activos, la asociaciÃ³n con terceros, y demÃ¡s modalidades que permiten consolidar la apropiaciÃ³n de las tierras una vez han sido deforestadas.

default watermark

El presidente Duque dijo que, en marzo, el Gobierno presentarÃ¡ ante el Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas para los delitos ambientales y elevarlos a no excarcelables, pero es posible que esto se dilate, considerando que hay otros proyectos prioritarios en la agenda, como los que tocan directamente a la reactivaciÃ³n econÃ³mica tras la pandemia o la llamada â??reforma social y fiscalâ?•, el nombre de la nueva reforma tributaria que irÃ¡ con mensaje de urgencia al Congreso.



Foto: CÃ©sar CarriÃ³n â?? Presidencia.

Mientras tanto, para cumplir con su polÃtica de deforestaciÃ³n, tendrÃ¡ que tender puentes con las comunidades que tienen una honda e histÃ³rica tensiÃ³n con el Gobierno, en parte porque la manera en la que el Estado ha llegado a estas regiones ha sido Ãºnicamente con presencia militar.

La rendiciÃ³n de cuentas de la â??CampaÃ±a Artemisaâ??

SegÃºn el Instituto de HidrologÃa, MeteorologÃa y Estudios Ambientales (IDEAM), entre enero y marzo del aÃ±o pasado, la AmazonÃa concentrÃ³ el 68.3 % de las alertas de deforestaciÃ³n, mientras que en el mismo periodo del 2019 la cifra fue de 57 %. Los departamentos mÃ¡s crÃticos son Meta, Guaviare y CaquetÃ¡, que tuvieron un incremento del 82.8 % porque pasaron de 35 mil hectÃ¡reas taladas en el primer trimestre de 2019 a 64 mil en los tres primeros meses de 2020.

Es ahÃ, en pleno corazÃ³n de la deforestaciÃ³n, donde se concentra la campaÃ±a Artemisa. Cuando la anunciaron en abril de 2019, el Alto Consejero para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael GuarÃn, quien depende directamente del Ejecutivo, le dijo semanas despuÃ©s a La Silla VacÃa que para aterrizar â??Artemisaâ?? habÃa varios detalles en cocciÃ³n, como la reforma a la Fuerza PÃºblica para que se adaptara a la nueva estrategia.

Lo que quedÃ³ en el papel es que diez batallones de alta montaÃ±a y cinco de selva ubicados en zonas donde la deforestaciÃ³n estÃ¡ disparada, como San Vicente del CaguÃ¡n en CaquetÃ¡ o MapiripÃ¡n en Meta, tendrÃan como prioridad el cuidado del medio ambiente, con resultados medibles en nÃºmero de operaciones para evitar la tala o el acaparamiento de tierras. AdemÃ¡s, que el 10 % de los soldados reclutados por aÃ±o en Colombia serÃan capacitados para dedicarse exclusivamente a prestar servicio ambiental, algo que desde 2017 estÃ¡ estipulado en la ley de reclutamiento.



Foto: @Infopresidencia

Un aÃ±o y medio despuÃ©s, los batallones ponen de su personal para llevar a cabo los operativos y la reforma a la Fuerza PÃºblica sigue en suspenso. A eso se suman los costos de estos operativos. Solo en el primero, en el Parque Chiribiquete en abril de 2019, segÃºn el consejero GuarÃn, se gastaron 700 millones de pesos (cerca de 200 000 dÃ³lares) en horas vuelo de los helicÃ³pteros, lo que hace muy difÃcil que estos operativos sean sostenibles en el tiempo.

SegÃºn cifras del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) entregadas a Mongabay Latam, a diciembre de 2020, para Artemisa y demÃ¡s operaciones ambientales se destinaron 14 489 hombres (entre EjÃ©rcito, Fuerza AÃ©rea y Armada) y 7811 policÃas. Para esa misma fecha ya se habÃan

realizado ocho operativos Artemisa: tres en el Parque Chiribiquete (en abril, junio y agosto de 2019), uno en el Parque Tinigua en febrero de 2020, uno en el Parque La Macarena en septiembre de 2020; uno en el Parque La Paya y otro en bosque prÃstino del departamento de CaquetÃ¡ en octubre de 2020 y un Ãºltimo en la zona del YarÃ, en lÃmites entre los departamentos de Meta y CaquetÃ¡, en noviembre de 2020.

En esos ocho operativos, el CGFM indica que ha â??recuperado mÃ¡s de 9000 hectÃ¡reas de bosqueâ?•. Sin embargo, el tÃ©rmino â??recuperadoâ?•, como lo indica un exmilitar de alto nivel que conoce por dentro la campaÃ±a Artemisa y prefiere mantener su nombre en reserva, â??quiere decir que hacen el operativo y esas hectÃ¡reas quedan vacÃas porque sacan a la gente, pero no necesariamente quiere decir que hay presencia institucional permanente. Eso sÃ serÃa recuperarâ?•.

Crecen los cuestionamientos

Las cifras oficiales entregadas a este medio tambiÃ©n mencionan la captura de 68 personas, entre ellas 20 menores de edad. SegÃºn una fuente de la FiscalÃa que lo sabe de primera mano, pero que pidiÃ³ no ser citada porque no es vocera oficial, â??menos de 10 personas son de nivel medio. No hay determinadores [grandes financiadores de la deforestaciÃ³n]â?•.

default watermark



Foto: @Infopresidencia.

Esto se ha relacionado con algunos de los resultados a lo largo de casi dos aÃ±os. Por ejemplo, en el primer operativo, realizado en Chiribiquete en abril de 2019, el Gobierno dijo que capturaron a 10 personas, enviaron a cuatro niÃ±os al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y recuperaron 120 hectÃ¡reas de bosque. Sin embargo, una ComisiÃ³n de VerificaciÃ³n â??integrada por la ComisiÃ³n Colombiana de Juristas y otras organizaciones en terrenoâ?? fue a la zona y documentÃ³ que â??por el contrario se generaron daÃ±os en la vegetaciÃ³n y murieron animalesâ?•, y que los capturados terminaron aceptando cargos y a las 24 horas los soltaron con la condiciÃ³n de no volver al sitio.

â??En ese operativo de Artemisa cogieron a la gente humilde, no cayeron los grandesâ?•, asegura AndrÃ©s Pacheco, entonces personero de San JosÃ© del Guaviare, quien como funcionario del Ministerio PÃºblico tenÃa a su cargo velar por los derechos humanos en la regiÃ³n.

Lo mismo pasÃ³ con los famosos incendios de La Macarena de marzo de 2020. Aunque la FiscalÃa tenÃa en la mira capturar a 35 ganaderos dueÃ±os de vacas dentro de Parques Naturales, la sospecha dentro de la instituciÃ³n es que alguien filtrÃ³ el operativo porque, cuando llegaron, capturaron solo a 20 personas y 16 de ellos eran campesinos que no eran dueÃ±os ni de vacas ni de tierras. Solo cuatro personas poseÃan algunas cabezas de ganado.

default watermark

La FiscalÃa, en una respuesta oficial de la DirecciÃ³n Especializada Contra las Violaciones de los Derechos Humanos entregada a Mongabay Latam, dice que entre sus logros estÃ¡ el hecho de que ya tienen Ã³rdenes de captura por delitos contra el medio ambiente contra los lÃderes de las disidencias Gentil Duarte, IvÃ¡n Mordisco, y Jhon 40. En teorÃa, en este momento los estÃ¡n persiguiendo.

AdemÃ¡s, aseguran que han judicializado a los exalcaldes Ã?scar Ospina, Pedro Novoa y Jhoniver Cumbe de los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores (Guaviare), respectivamente, â??por su probable responsabilidad en dinamizar la deforestaciÃ³n en el departamentoâ?•, asÃ como â??a suplantadores de comunidades Ã©tnicas que comercializan tierras de resguardos [indÃgenas]â?•.

default watermark


default watermark

Foto: FundaciÃ³n para la ConservaciÃ³n y el Desarrollo Sostenible, FCDS.

Para dos fiscales que llevan varios aÃ±os siguiÃ©ndole la pista a la tala en la AmazonÃa, estos operativos no han dado con los grandes financiadores pero sÃ van dejando pistas e informaciÃ³n clave para armar el rompecabezas que â??nos permita llegar a esos hombres grises, que se mueven entre la legalidad y la ilegalidadâ?•. AdemÃ¡s, dicen los fiscales, se ha podido identificar por quÃ© medio les pagan a los campesinos para que talen, cada cuÃ¡nto lo hacen y dÃ³nde se dan esos pagos.

Sin embargo, el costo que se debe pagar por avanzar con las investigaciones es la desconfianza de la gente en las autoridades. Las comunidades aseguran que no confÃan porque han sido testigos de la captura de campesinos, incluidos menores de edad, en zonas con muy poca presencia del Estado e invadidas por disidencias de las FARC, como la de Gentil Duarte que, segÃºn EjÃ©rcito y FiscalÃa, ha reforzado el control de la tala y la imposiciÃ³n de normas ambientales en algunos municipios del Guaviare.

La FiscalÃa dice que estÃ¡ trabajando cada vez de manera mÃ¡s coordinada con la Fuerza PÃºblica dentro de la CampaÃ±a Artemisa pero, una fuente experta en imÃ¡genes satelitales y otra que trabaja en terreno entre CaquetÃ¡ y Guaviare, aseguran que el gran talÃ³n de Aquiles de estos operativos es que no hay persistencia.

default watermark

â??De los ocho operativos en los que entran, capturan y se van, uno sÃ detecta una reducciÃ³n en la tala en esa zona los primeros meses, pero en la mayorÃa lo que se ve es que la gente regresa a seguir talandoâ?•, asegura Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del IDEAM.



Foto: FiscalÃa.

Otro obstÃ¡culo es que, por tratarse de operaciones que juntan a tantas fuerzas y entidades del Estado al tiempo, â??hay fugas de informaciÃ³nâ?•. La fuga puede venir de algo tan sencillo como que todos los participantes del operativo llevan su celular y, con muchas horas de anterioridad, saben los pormenores de lo que se harÃ¡. â??DespuÃ©s de que hicimos un operativo en el Parque Picachos nos enteramos de que gente de la zona estaba buscando infiltrar a la FiscalÃa para saber cuÃ¡ndo volvÃ-

amosâ?•, asegura una fuente que no citamos por su seguridad.

Mientras que el Presidente ya anunciÃ³ mÃ¡s operativos â??Artemisaâ?? en los prÃ³ximos dos meses, lo que mÃ¡s podrÃa frenar la deforestaciÃ³n es resolver la incertidumbre jurÃdica sobre la tierra. El problema es que se necesitarÃ¡ mucho tiempo para lograrlo.

El trecho que le falta al catastro

La principal base para frenar la deforestaciÃ³n de raÃz es el catastro. Este gran directorio de tierras â??que hoy solo estÃ¡ actualizado en un 15 %â?? es un punto clave del Acuerdo de Paz con las FARC porque sirve, no solo para saber dÃ³nde empieza y dÃ³nde termina cada predio, sino quiÃ©n es el dueÃ±o, hace cuÃ¡nto lo tiene o quÃ© uso quiere darle al suelo. Actualizar el catastro ayudarÃa a reducir la incertidumbre jurÃdica sobre la tierra, evitando el acaparamiento, uno de los principales motores de la deforestaciÃ³n segÃºn el Ministerio de Ambiente y que finalmente lleva a que exista un enorme mercado negro de tierras.

La meta del Gobierno, segÃºn dice Alejandra Botero, Consejera para la GestiÃ³n del Cumplimiento en la Presidencia de Colombia, es tener el catastro actualizado en un 34 % a diciembre de 2021. Para eso, el Gobierno ya tiene 41 millones de hectÃ¡reas financiadas con dinero del Reino Unido, Alemania y USAID de Estados Unidos. Cerca de 31 millones son para zonas donde estÃ¡n los 11 nÃºcleos de alta deforestaciÃ³n en el paÃs â??cinco en la regiÃ³n amazÃ³nica, tres en la regiÃ³n PacÃfica, dos en la regiÃ³n Andina y uno en OrinoquÃaâ??.

default watermark

En la polÃtica que Duque lanzÃ³ a principios de enero desde Leticia, Amazonas, dice que el Conpes de deforestaciÃ³n â??se articulaâ?• con otro Conpes para catastro, pero no especifica cÃ³mo. Lo Ãºnico que dice es que crearÃ¡n, a partir de 2021, una mesa tÃ©cnica liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para â??priorizar la gestiÃ³n catastralâ?• y que el Ministerio de Agricultura, el Instituto GeogrÃ¡fico Agustin Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Ambiente van a adelantar la â??formalizaciÃ³n de territorios Ã©tnicosâ?•.

AhÃ es donde empieza la prueba. Para entrar y hacer el catastro en los territorios Ã©tnicos, el Gobierno tendrÃ¡ que hacer una consulta previa con indÃgenas, afros y otros grupos minoritarios. Estos son sectores sociales que salieron a marchar en el paro de noviembre de 2019 en contra del Gobierno y con los que Duque ha tenido duras tensiones, como no recibir a la Minga IndÃgena de suroccidente que caminÃ³ hasta BogotÃ¡ en el 2020 y que le dejÃ³ al presidente una simbÃ³lica â??silla vacÃaâ?• en la Plaza de BolÃvar en la capital.

Con ese trasfondo, el Gobierno Duque tendrÃ¡ que sentarse a negociar la puesta en marcha del catastro en territorios colectivos y esto no serÃ¡ fÃ¡cil. SegÃºn cifras de Alejandra Botero, en 143 municipios ya hay plata para financiar el catastro pero en 110 de ellos hay grupos Ã©tnicos con los cuales se tendrÃ¡ que conversar.

Aunque las comunidades Ã©tnicas querÃan concertar toda la polÃtica de catastro, tal como seÃ±alaron en varios comunicados, aseguran que nunca fueron consultados. DespuÃ©s de muchas negociaciones acordaron con el gobierno que la fase de reglamentaciÃ³n del catastro para territorios colectivos pasarÃ¡ por consulta previa, la cual estÃ¡ prevista para abril.



Foto: Rutas del Conflicto.

Tanto los indÃgenas, sentados en la ComisiÃ³n Nacional de Territorios IndÃgenas (CNTI), como las comunidades afro, tienen la voluntad de avanzar. Sin embargo, les preocupan dos puntos: que no tienen la posibilidad de ser gestores catastrales â??y con ello visitar la totalidad de los predios en sus territoriosâ?? y que en esas visitas o barridos prediales â??terminen traslapados territorios indÃgenas con el catastro minero porque por esa vÃa nos pueden quitar tierrasâ?•, asegura Camilo NiÃ±o Izquierdo, secretario ejecutivo de la CNTI y lÃder del pueblo Arhuaco.

Aunque el Gobierno puede empezar por entrar a predios que no se crucen con territorios colectivos, tendrÃ¡ que negociar esos dos puntos con las comunidades Ã©tnicas y eso puede ser bastante demorado para una actualizaciÃ³n catastral que es urgente en el paÃs.

* Texto publicado originalmente en Mongabay

https://es.mongabay.com/2021/03/deforestacion-colombia-insiste-en-las-operaciones-militares-mientras-la-titulacion-de-la-tierra-va-a-paso-lento/

CategorÃa

1. Lo MÃ¡s Destacado 2
2. Publicaciones

Etiquetas

1. Colombia
2. DeforestaciÃ³n
3. Disidencias
4. Tierras

Fecha de creaciÃ³n
08/03/2021
Autor
stack

default watermark